

San Felipe, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Visto, oído y considerando:

**PRIMERO:** Que, compareció ante este Tribunal con fecha 12 de abril de 2021, doña **KAREN CECILIA PASTEN ABARCA**, C.I N° 13.754.464-4, Profesora, domiciliada en Los Pinos s/n, El Arrayan, comuna de Catemu, quien interpone demanda, en juicio laboral de aplicación general por despido indebido y reincorporación, en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY**, R.U.T 69.060.400-0, representada por su alcalde don **Edgardo Raúl Gonzáles Arancibia**, abogado, ambos domiciliados en calle José Manuel Balmaceda N°174, LLay LLay, a fin de que se declare que el despido del que fue objeto fue indebido o incausado y se disponga el pago de las indemnizaciones que expone o en subsidio, ordene su reincorporación a las funciones docentes, y el pago de prestaciones, con costas, en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone:

Que ingreso a prestar servicios para la demandada con fecha 04 de marzo del año 2011, desempeñándose como profesora de inglés asignada al Liceo Politécnico de LLay LLay, mediante decreto Alcaldicio N°202 de 2011. La calidad jurídica fue a contrata, desde el 04 de Marzo de 2011 al 29 de Febrero de 2012, con designación de 41 horas.

Posterior a dicha fecha desempeño funciones en base a los siguientes nombramientos:

**Decreto N°116** de 2012, designada, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2012 al 28 de Febrero de 2013, con designación de 30 horas; **Decreto N°44** de 2013, designada, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2013 al 28 de Febrero de 2014, con designación de 32 horas, **Decreto N°36** de 2014, designada, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2014 al 28 de Febrero de 2015, con designación de 30 horas; **Decreto N°315** de 2015, nombrada, en calidad de titular, desde el 01 de Marzo de 2015 con carácter indefinido, con designación de 30 horas; Decreto N°0188 de 2017, nombrada,



amén de su designación de titularidad, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2017 al 28 de Febrero de 2018, con designación de 09 horas; **Decreto N°74** de 2018, nombrada, amén de su designación de titularidad, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2018 al 28 de Febrero de 2019, con designación de 08 horas; **Decreto N°11** de 2019, fue nombrada, amén de mi designación de titularidad, en calidad de contrata, desde el 01 de Marzo de 2019 al 29 de Febrero de 2020, con designación de 11 horas y Finalmente, el año 2020 por orden de modificación interna de 18 de Junio de 2020 se mantuvo la designación de 30 horas.

Que todos los nombramientos señalados lo fueron en calidad de docente, esto es, en su calidad de profesional de la educación, por lo que se rige por el D. F. L. N°1 de Educación de 1997 y de las leyes que la complementan y modifican.

Que el año 2016 comenzó con problemas de salud por lo que presento licencias médicas, que por carta de fecha 09 de diciembre de 2020 la demandada le comunica, en resumen, lo siguiente:

- a) Transcribe el artículo 72 bis de -según la misma carta de despido - la Ley N°19.071.
- b) Se indica gestión ante la COMPIN, la que determina mediante Resolución exenta N°09 de fecha 05 de marzo de 2020, que su estado de salud es recuperable.
- c) Se dispone el término de la relación contractual del total de las horas a contar del día 10 de diciembre de 2020.

Señala la carta:

*Estimada señora:*

*Comunicar a usted que de acuerdo a la relación contractual establecida con este municipio:*

- 1) *La Ley 19.071 que señala "Artículo 72 bis.- El alcalde podrá considerar*



*como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo. El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.-*

*2) La gestión realizada ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, la que determina mediante su Resolución Exenta N°09 de fecha 05/03/2020 "estado de salud recuperable".*

*Se dispone el término de la relación contractual del total de las horas a contar del día 10 de diciembre de 2020.*

*Informar que el estado de las cotizaciones previsionales en la AFP CAPITAL, se encuentran al día.*

Que en los últimos dos años de relación laboral, esto es, desde el 10 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2020 no se verificaron más de 6 meses de licencia médica. Por el contrario conforme listado maestro de licencias médicas emitido por Fonasa, entre ambas fechas la cantidad de días con licencias médicas fue de 149 días, que después de la fecha indicada como de despido ya no tuvo trabajo que realizar, pues le indicaron que estaba despedida, ni tampoco remuneración.

Así la relación laboral se extendió desde el 01 de Marzo de 2012 hasta el 10 de diciembre de 2020, esto es, 7 años, 9 meses y 9 días, su remuneración devengada para los efectos indemnizatorios es la suma de **\$987.263**.

Indica como consideraciones de derecho:



- 1) En primer término cabe dejar expresa constancia que la Ley N°19.071 fue dictada para sustituir el artículo 43 de la Ley N°18.290 (Ley de Tránsito), publicada el 01 de agosto de 1991 y contiene sólo un solo artículo que dice, la cual no se indica por señalar norma de tránsito que no tiene cabida en la discusión de autos.
- 2) Luego que la Ley N°19.071 es inaplicable a relaciones laborales entre municipio y docentes, atendido el texto.
- 3) Que los cuerpos legales que deben aplicarse a la relación laboral con el municipio demandado son el D. F. L. N°1 de Educación de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y el Código del Trabajo.
- 4) En efecto, el artículo 1° del Estatuto Docente dispone que quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal, como es el caso de la actora.
- 5) Luego el artículo 25 dispone que los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.
- 6) El artículo 36 precisa que los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.
- 7) A su vez el artículo 72 del Estatuto Docente señala que los profesionales de la Ley educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: a) Renuncia voluntaria; b) Falta de probidad, conducta inmoral, c) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, d) Término del período por el



cual se efectuó el contrato; e) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes; f) Fallecimiento; g) Aplicación del inciso séptimo del artículo 70; h) Salud irre recuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter; i) Pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente; j) Supresión de las horas que sirvan; k) Acogerse a la renuncia anticipada; l) Por disposición del sostenedor, a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del artículo 7° bis de esta ley; m) Aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 S.

8) El artículo 72 bis dice que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irre recuperable.

9) El artículo 71 señala que los profesionales de la Ley educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

10) El Código del Trabajo en su artículo 1°, por un lado indica que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias y que los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente -aquellos con estatutos especiales- se sujetarán las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

11) Los artículos 72 ter, 73 y 73 bis del Estatuto Docente establecen un régimen de indemnizaciones y bonos para el evento de aplicarse algunas de las causales del artículo 72, tratándose de la salud incompatible 6 meses de remuneración.



12) El artículo 162 del Código del Trabajo dispone la obligación del empleador de comunicar el despido, señalando la causal aplicada y los hechos que la configura.

13) *Por su parte el artículo 168 del Código del Trabajo, establece la regla general en materia de indemnización por años de servicios y mal despido, ordenando que si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores, esto es, *aumentada en treinta por ciento, si se hubiese dado término al contrato por aplicación improcedente de la causal del artículo 161, cincuenta por ciento si se hubiere dado término por aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa legal para dicho término o un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160.**

14) Que amén de este derecho esencial de todo trabajador a obtener una indemnización por años de servicios ante un mal despido, el artículo 75 del Estatuto Docente dispone el derecho a reclamar judicialmente la ilegalidad del término del nombramiento para obtener la reincorporación, cuando el municipio no observa las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley. De lo anterior se desprende que sólo se puede despedir por las causales legales y por aplicación de la regla general laboral, debe señalarse los hechos en que se funda, conforme indica el artículo 71 del mismo cuerpo legal que dispone que los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

15) La sanción por un despido ilegal es la reincorporación del profesional de la



educación, lo que se pide en este acto, pues dice la norma: que el profesional de la educación podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante.

16) Que como el decreto de cese no señala causal legal alguna que permita poner término a la relación laboral, resulta ser motivo suficiente para acogerse el reclamo.

17) Sin perjuicio de ello, los hechos en que se fundan tampoco constituyen causal alguna de aquella que la Ley señala.

18) En el caso de los profesionales de la educación estamos ante en presencia de una estabilidad laboral absoluta, lo que significa que ante un despido ilegal debe ordenarse la reincorporación.

19) Finalmente, el artículo 63 del Código del Trabajo dispone que las sumas que los empleadores adeuden a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro deberán ser pagadas reajustadas en el mismo porcentaje que haya variado el IPC y posteriormente devengarán el interés máximo permitido para operaciones reajustables.

### **Acción Principal por despido indebido e incausado.**

En los hechos fui despedida por la comunicación ya señalada, correspondiendo la determinación de la causal aplicada y a qué causal del Código del Trabajo debe asimilarse, para efectos sancionatorios del artículo 168 del Código del Trabajo.

Que es claro, sin perjuicio de las facultades del tribunal, que se ha aplicado la causal de salud incompatible, la que debiese ser asimilada a alguna del artículo 160 del Código del Trabajo, puesto que es de caducidad por actos del trabajador.

Que la causal aplicada de salud incompatible como se ha dicho no se



configuró puesto que tal casual se configura, en el evento de que el municipio la aplique (se utiliza la expresión podrá), cuando se hace uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que en la especie no se produjo, pues en los dos últimos años de relación laboral el número de días con licencia médica fue de 149.

Cabe hacer presente que la norma es una reiteración de lo establecido en el Estatuto Administrativo (artículo 151), Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (artículo 148), Estatuto Atención Primaria de Salud (artículo 48), teniendo larga data de entendimiento y aplicación. Conforme a ello, el despido debe ser declarado improcedente, toda vez que la casual no se configuró y la demandada debe ser condenada a pagarme la indemnización por falta de aviso previo y la indemnización por años de servicios, incrementada esta última en un ochenta por ciento, conforme al artículo 168 del Código del Trabajo.

Subsidiariamente a la petición anterior, en el evento de que se considere que la carta de despido no contiene la causal legal de despido, declarar que el despido fue incausado.

Que al no tener causal de despido, procede el pago de las indemnizaciones por falta de aviso previo y por años de servicios, incrementada esta última en un cincuenta por ciento, conforme al artículo 168 del Código del Trabajo.

#### **En cuando a la demanda subsidiaria por despido Ilegal.-**

La intención de esta parte es obtener el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por años de servicios e incremento sancionatorio producto del mal despido, conforme las reglas generales del Código del Trabajo y el vacío que existe en la normativa especial.

Sin embargo, y para el evento de que se considere que el derecho que le nace al profesional es sólo la reincorporación, en subsidio de la declaración de





despido improcedente o incausado se demanda la reincorporación conforme al artículo 75 del Estatuto Docente, dado que por lo dicho en el párrafo anterior no se configuró la causal de despido aplicada.

Que sin perjuicio de todo lo anterior la carga de la prueba para acreditar la causal de despido le corresponde al empleador y debe referirse sólo a lo dicho en la carta de despido.

Que conforme a lo señalado, se requiere al Tribunal condene a la demandada a lo siguiente:

1. Que se declare improcedente el despido debiendo pagarme la demandada indemnización por falta de aviso previo equivalente a un mes de remuneración por la suma de \$987.263, indemnización por años de servicios por la suma de \$7.898.104 e incremento de la indemnización por años de servicios por \$6.318.483, o en subsidio se declare sin causa el despido del que fui objeto, debiendo pagarme la demandada indemnización por falta de aviso previo equivalente a un mes de remuneración por la suma de \$987.263, indemnización por años de servicios por la suma de \$7.898.104 e incremento de la indemnización por años de servicios por \$3.949.052.
2. Subsidiariamente, se declare ilegal el despido, ordenando reincorpórame, pagándome las remuneraciones desde el despido hasta la reincorporación.
3. Que todas las prestaciones anteriormente solicitadas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes legales
4. Que la demandada sea condenada al pago de las costas de la causa.

Previo cita de normas legales, solicita tener por deducida demanda en procedimiento de aplicación general por reintegro y cobro de indemnización, declarando que el despido del que fue objeto fue improcedente o subsidiariamente incausado, y ordenar el pago de las indemnizaciones por falta de aviso previo, por años de servicios e incremento de esta última, o subsidiariamente, declarar ilegal



el despido que fue objeto ordenando se debe reintegrar a sus funciones en el establecimiento que se desempeñaba, con el pago de las remuneraciones desde la separación hasta la reincorporación, todo con reajustes, intereses y costas.

**SEGUNDO:** Que con fecha 18 de mayo de 2021 comparece doña **GABRIELA GUZMAN VEGA**, Abogada, cédula de identidad N° 15.851.500-8, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY - LLAY**, corporación autónoma de derecho público, R.U.T 69.060.400-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida José Manuel Balmaceda 174, de la Comuna de Llay-Llay, quien dentro de plazo y en forma legal, opone las excepciones que señala en base a los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que expone:

0 En primer lugar, excepción de incompetencia absoluta del tribunal.

En subsidio, excepción de incompatibilidad de las pretensiones.

En cuanto a la primera causal Indica, la actora en su libelo, señala que su contratación se sustanció mediante una serie de contrataciones bajo modalidad de contrata.

La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, reglamenta en su artículo 1 ° inciso segundo, que: *“La administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las fuerzas Armadas y las Fuerzas de orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”* A su vez, el artículo 15 de la misma ley ya señalada, expresa: *“el personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones”*.

Necesario es tener presente la norma expresa, en relación a la competencia



de los tribunales de letras de Trabajo, que respecto al artículo 420 letra a), señala que serán de competencia de los Tribunales de letras del Trabajo: *a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales derivadas de la interpretación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral*".

Cabe precisar que la actora se encontraba sujeta a la Ley N°19.070, Estatuto de Profesionales de la Educación. Este cuerpo legal se aplica en cuanto a su ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y cesación de sus funciones. Si bien dicho texto, hace remisión a las normas del Código del Trabajo, ello sólo ocurre en lo no regulado por este Estatuto. Precisamente la cesación de funciones se encuentra reglamentada, en cuanto a sus causales, indemnizaciones, y procedimientos aplicables, no siéndole posible por tanto confundir la materia con reglamentación propia del Código del Trabajo. Tanto es así, que este cuerpo legal, en su artículo 1°, se resta competencia para conocer del asunto de autos, reglamentando en su inciso primero y segundo, expresamente: *"las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este código, y por sus leyes complementarias.*

*Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas e instituciones del Estado o de aquellas en que este tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial."*

Cabe indicar, que no existe contradicción entre las partes respecto de la calidad a contrata de la actora, que informaba su relación con la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, ergo debemos concluir que se encontraba sujeta a un vínculo de naturaleza estatutaria y no laboral, por lo que malamente podría analizarse el término de su contrata a la luz de las normas del Código del Trabajo.



Tanto es así, que incluso, esta falta de competencia ameritó la dictación de la ley 21.280, que amplía el ámbito de aplicación del Procedimiento de Tutela. Pero, el procedimiento intentado por la actora en estos autos, es uno de naturaleza diametralmente distinta, es el procedimiento ordinario de aplicación general. Sin perjuicio de ello, si bien se encuentran los funcionarios municipales facultados para recurrir al procedimiento de tutela laboral, en ningún caso faculta de manera amplia para aplicar las normas sustantivas del Código del Trabajo.

Por su parte, el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales dispone que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.

De esta manera es manifiesto que el tribunal es absolutamente incompetente para conocer de la acción deducida.

En segundo lugar interpone excepción de incompatibilidad de acciones e improcedencia de las prestaciones solicitada.

Que la actora solicita se declare improcedente el despido debiendo cancelarse la indemnización por falta de aviso previo equivalente a un mes de remuneración por la suma de \$987.263, indemnización por años de servicio, por la suma de \$7.898.104 e incremento de la indemnización por años de servicios por \$6.318.483, o en subsidio se declare sin causa el despido del que fue objeto, debiendo pagar la demandada indemnización por falta de aviso previo equivalente a un mes de remuneración por la suma de \$987.263, indemnización por años de servicios por la suma de \$7.898.104 e incremento de la indemnización por años de servicios por \$3.949.052.

Subsidiariamente, se declare ilegal el despido, ordenando su reincorporación y pago de remuneraciones desde el despido hasta la reincorporación.

En este orden de ideas, podemos advertir que las pretensiones indicadas por la actora, en nada se condicen con lo planteado en su demanda. Pues, de la



simple lectura del libelo pretensor, reconoce la actora ser funcionaria a contrata, a la que le es aplicable plenamente la ley N° 19.070, y, por tanto, las normas indemnizatorias propias de dicho cuerpo legal. Luego, hace extensible el régimen indemnizatorio del artículo 168 del Código del Trabajo, la que está reservada únicamente al contexto del término de relación de carácter laboral, más no estatutaria como la que en este acto nos convoca. Las indemnizaciones que la actora pretende, (indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios y el respectivo recargo legal) no son procedentes en autos, toda vez que si bien es efectivo que el artículo 71 de Estatuto docente, permite la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código del Trabajo, dicha norma debe ser consecuente con lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo, por lo que sólo es admisible la remisión al Código del Trabajo en aquellas materias no reguladas estatutariamente y en la medida que no fueren incompatibles. Lo que en la situación que se somete a conocimiento del tribunal, no acontece, dado que la ley 19.070, contiene regulación referida al término de los servicios de los docentes, y las prestaciones que en dicho caso le corresponden.

En conclusión, la calidad a contrata de la demandante, importa una relación especial con su empleador, relación que dista de aquella de régimen ordinario del Código del Trabajo. La relación de doña Karen Pasten con la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, corresponde a aquella denominada estatutaria. El vínculo que los ligó, se erigió con las normas del derecho público como base, el origen directo de la relación es la ley, la que define previamente cual es el marco de derechos y obligaciones que corresponde observar al funcionario, y será condicionado por los fines del Estado y sus organismos, con énfasis en el bien común o el interés general, por lo que debe ceñirse estrictamente a su estatuto.

Prevía cita de normas legales solicita tener por opuesta las excepciones de incompetencia absoluta de tribunal en atención a la materia, y de incompatibilidad e improcedencia de las prestaciones de la actora, una en subsidio de la otra, en contra de la demanda incoada en autos, darle tramitación y en definitiva acogerlas todas o indistintamente alguna de ellas, en la forma planteada,



con expresa condena en costas.

En subsidio, contesta derechamente la demanda, negando categóricamente las aseveraciones planteadas por la demandante en su libelo y advirtiendo desde ya un planteamiento erróneo de las pretensiones alegadas por la actora, por lo que solicita el completo rechazo de la demanda en todas sus partes, según los fundamentos de hecho y de derecho que por razones de economía procesal, solicita tener por expresa e íntegramente reproducidos, en lo pertinente, todos y cada uno de los argumentos expuestos en lo principal de su presentación, agregando además lo siguiente:

Doña Karen Cecilia Pastén Abarca, prestó servicios en calidad de contrata, como profesora de inglés, en el Liceo Politécnico de Llay Llay, desde el 4 de marzo del 2011 hasta el 9 de diciembre de 2020, relación que se materializó a través de una serie de contrataciones bajo la modalidad a contrata. A su respecto se dictaron los siguientes decretos Alcaldicios:

1. Decreto Alcaldicio N° 202 de 2011, que se extendió desde el 4 de marzo de 2011 al 29 de febrero de 2012, con designación de 41 horas. En esta oportunidad su título estaba en trámite.
2. Decreto Alcaldicio N° 116 de 2012, desde el 1 de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013, con designación de 30 horas.
3. Decreto Alcaldicio N°44 de 2013, desde el 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014, con designación de 32 horas.
4. Decreto Alcaldicio N° 36 de 2013, desde el 1 marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015, con designación de 30 horas.
5. Decreto Alcaldicio N° 315 de 2015, fue nombrada en calidad de titular desde el 1 de marzo de 2015, con carácter indefinido con designación de 30 horas.
6. Decreto Alcaldicio N° 188 DE 2017, en calidad de contrata desde el 1 de



marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018, con designación de 8 horas.

7. Decreto Alcaldicio N° 74 de 2018, en calidad de contrata, desde el 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020.

Finalmente, por una modificación interna, con fecha 18 de junio de 2020 se imputan a la señora Karen Pasten Abarca, la cantidad de 30 horas en calidad de titular, para ejercer como profesora de inglés en el Liceo Politécnico de Llay Llay.

Tal como indica la actora en su libelo, en el año 2016 comenzó a presentar una serie de problemas de salud por lo que hizo uso de licencias médicas.

Para adoptar la decisión de cese de su contrata, se consideró por el Departamento de Administración de Educación Municipal, las licencias comprendidas en el período del 4 de diciembre de 2017 al 4 de diciembre de 2019, las que dan un total de **149 días según detalle que indica.**

Dada la cantidad de licencias médicas presentadas por la actora, con fecha 28 de noviembre de 2019, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, ingresa solicitud de evaluación de salud irrecuperable de doña Karen Cecilia Pastén Abarca, a la COMPIN Subdivisión Aconcagua, organismo que a través de Resolución Exenta N° 9 de fecha 5 de marzo de 2020, resuelve:

Denegar la solicitud, estableciendo que doña Karen Cecilia Pastén Abarca, RUN N°13.754.464-4, tiene un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes.

Con tal mérito, se dicta el Decreto Alcaldicio N° 458 de 9 de diciembre de 2020, que dispone el cese de funciones a contar del 10 de diciembre de 2020, de doña Karen Cecilia Pasten Abarca, por la causal contemplada en el artículo 72 bis letra h "Salud incompatible con el desempeño del cargo". El instrumento indicado, fue debidamente notificado a la actora a través de carta con fecha 9 de diciembre de 2020.



En razón de lo expuesto, cabe concluir que se cumplieron a cabalidad los requisitos para aplicar la causal invocada, a fin de fundar el cese de las funciones de la actora.

La materia que se somete a conocimiento y la forma en como la actora planteó sus pretensiones, nos impone la carga de analizar los siguientes aspectos de derecho:

El artículo 72 bis de la ley 19.070, que fija el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en la letra h, reglamenta lo siguiente:

Artículo 72 bis.- El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

En consecuencia verificado, que la actora hizo uso de licencias médicas por 180 días, en el período que se indicó, y habiéndose realizado la consulta a la comisión de Medicina Preventiva e invalidez, oportunamente, a fin de obtener pronunciamiento de irrecuperabilidad de salud de doña Karen Pasten Abarca, denegándose esta, por poseer un estado de salud recuperable, en consecuencia está facultado el sostenedor para cesar las funciones de la actora, invocando para tal efecto la causal contenida en el artículo 72 bis, letra h) de la Ley 19.070. Menester es señalar que, respecto de los profesionales regidos por el Estatuto docente, sólo les son aplicables, las causales de término de cese de funciones que dicho cuerpo normativo dispone, pues cuenta con norma expresa en la materia, no siendo posible la aplicación supletoria de las normas del Código del Trabajo.

La jurisprudencia ha sostenido que, cumplidos estos requisitos copulativos, procede la causal de salud incompatible, incluso sin derecho a indemnización alguna. A modo ejemplar, la sentencia de fecha 23 de mayo de 2017, dictada en causa T-91-2017, del Juzgado de Letras de Valparaíso, sostiene en su considerando duodécimo, que: "En consecuencia, se ha demostrado la





conurrencia copulativa de los requisitos de procedencia de la causal invocada, esto es: a) Que el docente haga uso de licencias médicas continuas o discontinuas por un período superior a seis meses, excluyéndose las licencias por accidentes en actos de servicio y de protección a la maternidad, y b) que tales licencias tengan lugar en los dos últimos años. Por lo anterior, se ha configurado la causal de la letra h) del art. 72 del Estatuto Docente y por ello, el despido de la actora se ha ajustado a derecho, no siendo procedente indemnización alguna por término de contrato”. La salud irrecuperable e incompatible con el desempeño, hace a su vez referencia, a lo propio regulado por el Estatuto de Funcionarios Municipales, cuyo artículo 148, señala que podrá considerarse como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

En lo petitorio del libelo, la actora solicita a SS., en concreto lo siguiente:

*“Tener por deducida demanda de procedimiento de aplicación general por reintegro y cobro de indemnización, en contra de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, representada por don Edgardo Raúl González Arancibia, ambos ya individualizados declarando que el despido del que fui objeto fue improcedente o subsidiariamente incausado, u ordenar el pago de las indemnizaciones por falta de aviso previo, por años de servicio e incremento de esta última, o subsidiariamente, declarar ilegal el despido del que fui objeto ordenando me debe reintegrar a mis funciones en el establecimiento que me desempeñaba, con el pago de las remuneraciones desde la separación hasta la reincorporación, todo con reajustes, intereses y costas”.*

Para un mejor entendimiento de la razón por la cual las peticiones de la actora son improcedentes, es necesario desglosarlas. De esta forma, una pretensión principal, es: *“(que se declare) que el despido del que fui objeto fue improcedente o subsidiariamente incausado, u ordenar el pago de las indemnizaciones por falta de aviso previo, por años de servicio e incremento de esta última”*



Reitero en este punto, lo señalado respecto de la segunda excepción perentoria deducida en contra de esta demanda, a saber, la de incompatibilidad e improcedencia de las pretensiones de la actora. Puntualizo, no obstante, que los conceptos indemnizatorios que alega la demandante, están reservados para una relación de carácter laboral. Aun cuando, la Ley N° 19.070, hace remisión al Código del Trabajo, lo hace respecto de todo lo no regulado, y las causales de cese de funciones con las indemnizaciones correspondientes, se encuentra expresamente reglamentadas, tal como señala la contraria en su demanda, en los artículos 72 ter, 73 y 73 bis del Estatuto docente. Sin perjuicio, que en el libelo la actora relata, que en materia de indemnizaciones *“tratándose de salud incompatible (corresponden) 6 meses de remuneración”*, no solicita ello en su demanda. Prefiere, invocar el artículo 168 del Código del Trabajo, que, si bien es más cuantioso, olvida la contraria que expresamente su aplicación está delimitada. Señala dicho artículo que:

*“El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas:*

*En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente del artículo 161;*

*En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa legal para dicho término;*

*En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación*



*indebida de las causales del artículo 160.*

*Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo plausible por el tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, se incrementará en un cien por ciento ”.*

Ciertamente podemos sostener, que la Sra. Pasten Abarca, no tenía la calidad de trabajadora, era funcionaria a contrata, y su contratación, no terminó por ninguna de las causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Debemos tener presente que cuando ha sido intención del legislador, al interior del Estatuto docente, hacer procedentes las indemnizaciones del Código del Trabajo, lo ha hecho expresamente, como es el caso del artículo 87 de la Ley N° 19.070, pero circunscrito a los profesionales de la educación en el sector particular, no haciéndolo respecto de los docentes del sector municipal, como es la hipótesis del caso de autos.

Luego la segunda pretensión, formulada de manera subsidiaria por la actora es: *“declarar ilegal el despido del que fui objeto ordenando me debe reintegrar a mis funciones en el establecimiento que me desempeñaba, con el pago de las remuneraciones desde la separación hasta la reincorporación, todo con reajustes, intereses y costas”*

La solicitud formulada, es acorde con lo reglamentado en el artículo 75 de la Ley N°19.070, que en su inciso segundo indica:

*“Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación*



*en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante".*

Sin embargo, existe en la formulación de la solicitud una extralimitación, pues nada señala la norma fundante de la pretensión respecto de la procedencia de remuneraciones retroactivas, debiendo limitarse la medida sólo a la reincorporación. Debemos traer a la palestra, el aforismo jurídico que señala que donde la ley no distingue, no les es dado al intérprete distinguir, pues de acceder a la pretensión de la contraria en los términos formulados excede la voluntad legislativa, que en el caso de autos es clara, y se confina únicamente y exclusivamente al reintegro del funcionario, no al pago retroactivo, efecto que debe estar expresamente regulado, lo que no ocurre en la legislación aplicable a la materia. La relación de la actora con la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, se enmarca en normas propias del derecho administrativo, en este contexto el artículo 52° de la Ley N° 19.880, señala que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo.

En conclusión, las pretensiones formuladas por la actora, no se condicen con el estatuto que la rige, por lo que la demanda debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Prevía cita de normas legales solicita tener por contestada la demanda de autos y en virtud de lo expuesto, rechazarla en todas sus partes, con expresa condena en costas.

**TERCERO:** Que, la audiencia preparatoria se celebró con fecha 26 de mayo de 2021, asistiendo a ella los apoderados de las partes.

En dicha oportunidad, el Tribunal llamó a las partes a conciliación, lo que no se produjo, procediéndose a recibir la causa a prueba.

**Que, se fijaron como hechos a probar los siguientes:**



1. Las circunstancias de término del vínculo contractual entre las partes, en su caso concurrencia de la causal que fuera invocada por la demandada, esto es, salud incompatible con el desempeño del cargo. Hechos y circunstancias que lo constituyen.

2. Presupuestos facticos de la excepción de incompetencia absoluta e incompatibilidad deducida por la demandada.

3. Procedencia de la reincorporación de la actora. Hechos y circunstancias.

4. Remuneración de la actora para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo. 5. Procedencia de las prestaciones que la actora indica en su demanda, en su caso, monto y periodo al cual correspondería.

**CUARTO:** Que, la audiencia de juicio tuvo lugar los días 01 y 27 de julio de 2021 y 21 de septiembre de 2021 vía Zoom, en dicha oportunidad, las partes rindieron las siguientes probanzas, a saber:

**Prueba documental demandante:**

1. Decreto Alcaldicio N°202 de marzo de 2011.
2. Resolución Exenta N°9 emitido por Compín Sub Comisión Aconcagua de fecha 05 de marzo de 2020.
3. Listado maestro de licencias médicas emitido por el Ministerio de Salud Servicio de Salud de fecha 26 de marzo de 2021.
4. Liquidaciones de sueldo de los meses de octubre y noviembre de 2020.
5. Carta de aviso término de contrato de fecha 09 de diciembre de 2020

**Exhibición documental:**

1. Licencias médicas presentadas por la actora últimos 24 meses desde el 10 de diciembre de 2020 hacia atrás.



2.- Investigación y documentación tomada en consideración para determinar el término de la relación laboral de la actora.

*No exhibe la parte demandante solicita se haga efectivo apercibimiento legal dejando su resolución para definitiva.-*

**Confesional:**

1. **Edgardo González Arancibia**, Representante Legal de la demandada Ilustre Municipalidad de Llay Llay, quien no comparece solicitando la demandante se haga efectivo el apercibimiento legal dejando su resolución para definitiva.

**Testimonial:**

1. **Maricela del Carmen Álvarez Donoso**, Rut: 14.239.351-4, con domicilio en René Schneider N°109, Población Pedro Aguirre Cerda, Llay Llay, 47 años, casada, comerciante.

2. **Catalina Patricia Pizarro Aguilera**, Rut: 19.271.880-5, con domicilio en Calle Blanco N°1215, Valparaíso, 24 años, soltera, ingeniera informática.

**Las cuales constan íntegramente en registro de audio.**

**Oficio:**

1. Correo electrónico de fecha 09 de julio de 2021 de Fonasa San Felipe, que remite información de la demandante.

**Por su parte la parte demandada incorporo en juicio:**

**Prueba documental demandada:**

1. Decreto Alcaldicio N°202, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, de fecha 5 de julio de 2011, que nombre personal docente contratado.

2. Decreto Alcaldicio N°116 de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, de fecha 23 de abril de 2012, que nombra personal docente contratado.



3. Decreto Alcaldicio N° 44 de fecha 2 de mayo de 2013, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay que nombre personal docente contratado.
4. Decreto Alcaldicio N°36 de fecha 25 de marzo de 2014, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, que nombre personal docente contratado.
5. Decreto Alcaldicio N°315 de fecha 25 de agosto de 2015, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, que nombra personal docente titular.
6. Decreto Alcaldicio N°188, de fecha 13 de marzo de 2017, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, que nombre personal docente contratado.
7. Decreto Alcaldicio de fecha 13 de febrero de 2018, que nombre personal docente contratado.
8. Decreto Alcaldicio de fecha 1 de febrero de 2019, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay que nombre personal docente contratado.
9. Decreto Alcaldicio N°458 de fecha 9 de diciembre de 2020, de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, que dispone el cese de funciones.
10. Carta de fecha 9 de diciembre de 2020, dirigida a doña Karen Cecilia Pastén Abarca.
11. Oficio N°93 de fecha 6 de marzo de 2020, de la SEREMI de Salud de Región de Valparaíso, a la Ilustre Municipalidad de Llay Llay.
12. Resolución exenta N°09 de fecha 5 de marzo de 2020, de COMPIN, Subcomisión Aconcagua, sobre Evaluación por Salud Irrecuperable de funcionaria pública.
13. Certificado de envío de carta certificada de fecha 11 de diciembre de 2020.
14. Listado maestro de Licencias médicas de Fonasa, de doña Karen Cecilia Pastén Abarca.

**Oficio:**



1. Ord. N°171 de fecha 07 de julio de 2021 de COMPIN, subdivisión

Aconcagua, San Felipe, remite información.

**Testimonial:**

1. **Ernesto Alejandro Puebla Faúndez**, director Departamento de Educación  
Municipalidad de Llay Llay, C.I N° 12.953.544-K.

**La cual consta íntegramente en registro de audio.-**

**QUINTO:** Que, en primer término, es dable dejar establecido que no existe discusión entre las partes y que de la prueba documental acompañada consistentes en decretos alcaldicios se puede establecer lo siguiente:

1) Que, la demandante ingresó a prestar servicios como profesora el 04 de marzo del año 2011, desempeñándose como profesora de inglés asignada al Liceo Politécnico de Llay Llay, en calidad de contrata.

2) Que sus funciones las desempeño seguidamente a contar de la fecha señalada precedentemente en calidad de contrata con diferentes horas asignadas hasta el 10 de diciembre de 2020, para la Ilustre Municipalidad de Llay Llay.

3) Que, sin perjuicio de lo señalado a contar del año 2015 la actora es titular de 30 horas de Inglés como profesora del Liceo Politécnico de Llay Llay, según da cuenta Decreto Alcaldicio N° 315 (folio 24) y orden de modificación interna 30 horas emitido por el Daem de La Ilustre Municipalidad de Llay Llay de junio de 2020 (folio 25)

4) Que, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, su última remuneración mensual ascendía a la suma de \$987.263, según liquidación de sueldo noviembre del año 2020 (folio 43).-

5) Que, con fecha 09 de diciembre del año 2020, mediante carta de aviso se le pone termino a la relación contractual con la actora (sic) argumentado la causal del artículo 72 letra h) en relación al artículo 72 bis de la Ley 19.071.





**SEXTO:** Que, en cuanto a las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal y excepción de incompatibilidad de las pretensiones.

Respecto a la primera excepción el Tribunal la rechazará en atención a los señalado en el Artículo 75 del estatuto docente inciso segundo (DFL 1 Ministerio de Educación) el cual señala que *“Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante”-*

En cuanto a la segunda excepción el tribunal la rechazará en base a la norma señalada precedentemente y por entender que es una cuestión de fondo e interpretable por parte del Tribunal que le corresponde decidir en base a las acciones entabladas y en conformidad a la interpretación de diferentes leyes, estatutos en concordancia con la norma laboral.

**SEPTIMO:** Que, para efectos del despido de la actora se han invocado las siguientes normas del estatuto docente:

Artículo 72: Los profesionales de la Ley N°19.070 educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: **a)** Por renuncia voluntaria; **b)** Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor. **c)** Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su



función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. **d)** Por término del período por el cual se efectuó el contrato; **e)** Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes; **f)** Por fallecimiento; **g)** Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70 **h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter., i)** Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, **j)** Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley; **k)** Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. **l)** Por disposición del sostenedor, a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del artículo 7° bis de esta ley, tratándose de los docentes mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley. Para estos efectos, los establecimientos que contaren con menos de 20 docentes podrán poner término anualmente a la relación laboral de un docente. **m)** Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 S.

Respecto a la causal esgrimida en la carta de despido esto es la letra h) de la norma señala precedentemente, el Estatuto Docente señala para su procedencia;

Artículo 72 bis.- El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las



licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo. El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040.

Que de las normas transcritas en relación a la prueba acompañada en autos puede desprenderse lo siguiente:

La actora durante el año 2016 tuvo 30 días de licencia en 5 licencias otorgadas, durante el año 2017 tuvo 141 días de licencia en 12 licencia otorgadas, durante el año 2018 tuvo 20 días de licencia en 5 licencias otorgadas, durante el año 2019 tuvo 149 días de licencia en 16 licencias otorgadas y durante el 2020 no hay registro de licencias otorgadas, y sin perjuicio de ello la demandada no dio cumplimiento a la exhibición de prueba documental solicitada en el punto 1 de la demandante (licencias médicas recibidas) por lo cual se infiere que no tuvo licencias durante el periodo 2020, según da cuenta consolidado de licencias médicas emitido por FONASA (Folio 42)

Que al respecto la demandada señala en su contestación que se consideró por el Departamento de Administración de Educación Municipal, las licencias comprendidas en el período del 4 de diciembre de 2017 al 4 de diciembre de 2019, las que dan un total de **149 días** según detalle que indica.

Que por su parte la resolución exenta N° 09 de fecha 05 de marzo del año 2020, dictada por el Compín Aconcagua señala que la salud de la demandante es recuperable y no comprometen su desempeño laboral.

Que al momento de hacer efectivo el despido de la actora esto es el día 09 de diciembre del año 2020, 09 meses después de la resolución del Compín que declaraba Recuperable la salud de la actora, la demandante no contaba con los



seis meses de licencia médica que establece la norma del artículo 72 bis del estatuto Docente, pues en definitiva solo contaba con 149 días de licencia médica por el año 2019 solamente no cumpliéndose con la exigencia legal de ser las licencias presentadas superior a 6 meses.

Que así las cosas puede determinarse que en el despido de la actora la Municipalidad no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad.-

**OCTAVO:** Que en cuanto a lo solicitado por la demandante el Tribunal accederá a lo solicitado de manera subsidiaria esto es la reincorporación de la actora a sus funciones por así señalarlo la norma del artículo el artículo 75 inciso segundo del estatuto docente (DFL 1 Ministerio de Educación), pues es la consecuencia establecida por el legislador para aquella desvinculación que se considere ilegal, previniendo el mismo que la solución pasa por la reincorporación del docente a sus funciones que tenía asignadas en este caso en carácter de titular.

Que respecto a la acción principal, el tribunal no dará lugar a ella por cuanto pretende perseguir indemnizaciones propias del término de una relación laboral en este sentido lógico resulta entender que el legislador busco la estabilidad en el empleo al ordenar la reincorporación del trabajador como consecuencia de un despido ilegal.

Así también puede desprenderse de las normas de Tutela laboral en cuanto señalan en el artículo 489 inciso 4 del Código del Trabajo “*Con todo, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2° de este Código, y además ello sea calificado como grave, mediante resolución fundada, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se refiere el inciso anterior*”, es decir da al trabajador la posibilidad de elección lo cual no ocurre en la norma del estatuto docente analizado.



A su vez se ordenara la reincorporación de la actora a sus funciones como se señaló pero no se ordenará el pago de las remuneraciones solicitadas a consecuencia del despido pues se entiende que la consecuencia jurídica de este despido ilegal consiste solamente en la Reincorporación del Trabajador para efectos de seguir desempeñando sus funciones y mantención de su trabajo y horas asignadas, no existiendo norma expresa que indique que corresponde el pago del periodo en el cual la actora fue cesada en sus funciones.

Así también puede desprenderse que la intención del legislador solo fue decretar la reincorporación del Docente y no el pago de las remuneraciones que le hubiese tocado percibir (por su termino de contrato), pues de ser así lo habría señalado en la misma norma legal tal cual sucede a modo de ejemplo en el artículo 174 del código del trabajo que en su inciso segundo señala “*El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para poner término al contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios, debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo precedente, correspondientes al período de suspensión, si la separación se hubiese decretado sin derecho a remuneración. El período de separación se entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales y contractuales*”.

**NOVENO:** Que las probanzas han sido valoradas conforme a las normas de la sana crítica, según lo prescrito en el artículo 465 del Código del Trabajo, sin contradecir los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia de este tribunal.

Que la demás prueba rendida en juicio en nada altera lo ya razonado y la prueba documental y testimonial no analizada no es valorada por no tener relación con los hechos materia del juicio por tratarse claramente de una interpretación legal del despido de la actora en su calidad de Docente y que



respecto a los apercibimiento solicitados respecto a la prueba confesional y exhibición de documentos solicitada, el tribunal no hará uso de la misma por ser facultativo y en base a lo ya razonado.

Que, por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 446 y siguientes, del Código del Trabajo, artículos 1 y siguientes ley 19.070, DFL 1 del Ministerio de Educación Estatuto Docente y demás normas pertinentes **se declara:**

**I.-** Que se **RECHAZAN** las excepciones de Incompetencia absoluta del Tribunal e Incompatibilidad de acciones deducida por la demandada.

**II.-** Que se **ACOGE** la demanda deducida por **KAREN CECILIA PASTEN ABARCA**, en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY**, todos ya individualizados solo en cuanto se decreta:

- a) Que la demandante Karen Cecilia Pasten Abarca, deberá ser reincorporada a sus funciones anteriores a su despido como docente 30 horas en calidad de Titular del Liceo Politécnico de Llay-Llay, debiendo dar cuenta la demandada de ello al Tribunal dentro de 5 día de ejecutoriada la presente sentencia

**III.-** Que se condena en costas a la demandada regulándose las personales en la suma de \$1.000.000. (Un millón de pesos).

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Notifíquese a las partes vía correo electrónico.-

**RIT: O-61-2021.**

**RUC: 21-4-0330274-8**

Pronunciada por don **Arturo Eduardo Ull Yáñez**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.



En San Felipe a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>